

Bogotá, D.C., Abril 26 de 2007

Señor
KENNETH ROTH
Director Ejecutivo
Human Rights Watch
Washington D.C.

Apreciado señor Roth:

Para el Gobierno de Colombia tiene gran significación el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y sus observaciones las apreciamos con detenimiento. En el caso de HRW hemos reconocido su esfuerzo por condenar todas las atrocidades por igual, las campañas sobre minas antipersonal y contra el reclutamiento de menores, su preocupación por los derechos de las mujeres y el reconocimiento del derecho del Estado al uso legítimo de la fuerza ante las graves amenazas contra la democracia.

Por esas razones y por la importancia que tiene para muchos actores de la comunidad internacional la opinión de HRW, me veo obligado a hacerle algunas consideraciones respecto el testimonio de la Señora María Mc. Farland ante la subcomisión de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los EE. UU.

Ante todo coincidimos en los objetivos de fortalecer el Estado de derecho, proteger a la población, garantizar los derechos humanos y las libertades y fortalecer las instituciones colombianas que aparecen como trasfondo de esa intervención.

Debo señalarle que el Estado Colombiano no ha ocultado ninguno de sus problemas y por eso el trabajo de todas las instituciones ha sido arduo e intenso. Pero presentar la situación de Colombia como una situación cada vez más grave no corresponde a la realidad.

En 1992 el país tuvo tasas de homicidio de 78 por cada 100.000 habitantes. Recibí mi Gobierno en el 2002 con una tasa de 66 por 100.000. La buena noticia que celebramos los colombianos y que quisiéramos que ustedes reconocieran, es que el año pasado logramos reducirla a 38 por 100,000. Nuestra tasa de homicidios es hoy inferior a la de Sudáfrica, Venezuela y el Salvador. Son alrededor de 10,000 colombianos que cada año pueden vivir gracias a la Política de Seguridad Democrática, la cual hemos venido implementando con un enorme sacrificio de las mujeres y hombres de las fuerzas

armadas colombianas y al decidido apoyo bipartidista que el Congreso Norteamericano le ha dado al Plan Colombia.

En el 2001 nos asesinaron sin piedad 123 sindicalistas. Es triste saber que sólo hayamos logrado bajar a 25 muertes el año pasado, 100 menos que hace unos años, porque cada una de sus vidas era importante para nosotros. Pero creemos que hay un progreso enorme que quisiéramos que se reconociera. Y qué fe la que tengo al ver que este año sólo tenemos 1 muerte de sindicalistas en lo corrido del 2007. Quizá el hecho de que pasáramos de un presupuesto nacional para protección de personas vulnerables, de alrededor de US\$2 millones en 1999 a US\$30 millones este año, o que pasáramos de proteger 84 sindicalistas a 1,504, haya logrado salvar esas vidas humanas.

Somos concientes del drama humanitario que la violencia de las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico han ejercido sobre la población, en especial el desplazamiento humano forzado. Pero hemos avanzado y estamos convencidos de que vamos por el camino correcto. Para el año 2006, el número de personas desplazadas nuevas disminuyó en un 48.1% con respecto a las que se registraron en el año 2002. El presupuesto de programas para población desplazada se triplicó en el periodo 2002-2006 respecto al periodo 1995-2002, pasando de US\$270 millones a US\$ 880 millones. En este segundo mandato se tiene proyectado invertir US\$ 1.8 billones.

Las acciones de atención registran que el 80% de la totalidad de los hogares desplazados han recibido atención humanitaria de emergencia. Entre el periodo 2002-2007 se asignaron más de 65.000 subsidios de vivienda urbana y rural. Se estima que las coberturas en educación y salud para población desplazada superan el 80% de las familias registradas. Del total de hogares desplazados con niños menores de 18 años, más de un 30% han sido vinculados al programa Familias en Acción (120.000 familias) desde el año 2005. Se han vinculado a proyectos de seguridad alimentaria a más de 2.188.000 campesinos como un mecanismo para prevenir el desplazamiento. Finalmente, durante el periodo 2002-2006, el gobierno ha acompañado en el retorno a sus lugares de origen a más de 32.000 familias. El Alto Comisionado de ACNUR reconoció en su última visita el mes anterior que Colombia tiene una de las legislaciones más avanzadas y el sistema de atención más sofisticado del mundo en materia de atención a desplazados.

Nosotros no hemos tenido la más mínima duda sobre la importancia para Colombia de conocer toda la verdad sobre los grupos paramilitares. Por difíciles que puedan ser las revelaciones producto del proceso de Justicia y Paz, en torno las relaciones históricas entre los grupos paramilitares y diferentes sectores de la sociedad, el Gobierno

Nacional considera deseable y apoya sin restricción el conocimiento público de toda la verdad.

La Ley de Justicia y Paz está permitiendo que se conozca a fondo los lazos que por muchos años permanecieron ocultos entre miembros de la sociedad y las extintas autodefensas. Colombia está descubriendo la verdad gracias a nuestro proceso de paz. La verdad es una consecuencia deliberada, deseada y necesaria del proceso de paz del Gobierno.

De igual forma, estamos apoyando a la Rama Judicial con todos los recursos económicos, técnicos y humanos que han sido necesarios para que las investigaciones de la influencia del paramilitarismo en la política logren su finalidad de que exista verdad y justicia. A partir de la vigencia de 2007, hemos apropiado \$2.6 mil millones adicionales a la Corte Suprema de Justicia para las investigaciones de los congresistas involucrados. El presupuesto de la Fiscalía en el 2007 se ha incrementado en un 8.9%, fundamentalmente para atender los nuevos cargos y los gastos asociados a Justicia y Paz. En el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo hemos pedido facultades extraordinarias para modificar las plantas de personal de la Fiscalía y Procuraduría, para atender las necesidades de la Ley de Justicia y Paz.

Gracias al proceso de paz y la Ley de Justicia y Paz, hoy 31.671 colombianos miembros de los extintos grupos paramilitares y cerca de 10.000 miembros de los grupos guerrilleros han dejado las armas y están reintegrados a la sociedad. Esos nuevos ciudadanos que están viviendo en la legalidad, así como los más de 10.000 guerrilleros desmovilizados voluntariamente que abandonaron las armas y que ustedes descalifican, tienen hondas repercusiones en la sociedad colombiana. Dentro de ellos se encuentran 2.518 menores de edad rescatados de la guerra; 20 mil niños que recuperaron a sus padres y 40 mil familias recobraron a sus hijos, padres o compañeros.

Por estas razones, sorprende que el testimonio de HRW vea por todas partes concesiones, desconocimiento de derechos, desmovilizaciones fingidas, obstáculos a las investigaciones. Es un proceso difícil pero que se está enfrentando con transparencia y decisión y con respeto a la independencia de las instituciones.

En opinión del Gobierno Colombiano fortalecer la verificación, la capacidad institucional y la participación hace posible el éxito del proceso. El Estado colombiano ya invirtió US\$300 millones para el desarrollo de oportunidades sociales y económicas para la población desmovilizada, y tiene programados US\$386 millones para el período 2007-2010. Hasta ahora la comunidad internacional sólo ha invertido US\$11 millones.

Señor Roth: no queremos halagos, sino objetividad. Como el reconocimiento que el mes pasado hizo la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia el año anterior: “La Alta Comisionada ha podido observar un mayor compromiso de las autoridades colombianas para alcanzar los objetivos de las recomendaciones formuladas en sus informes anteriores sobre la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia, así como también un mayor esfuerzo para valorar el impacto concreto de aquéllas”.

El Gobierno Colombiano ha liderado un proceso de transformación del país con la mayor transparencia, de cara a la ciudadanía y a la comunidad internacional. Por ello reclamamos objetividad en este tipo de Informes para lograr un aporte constructivo al fortalecimiento de la democracia colombiana, de la seguridad y de la plena garantía de los derechos humanos.

Cordialmente,